

# MARGINALIDAD, INCLUSIÓN Y VALORES DEMOCRÁTICOS<sup>1</sup>

Víctor Manuel Durand

## Resumen

Los proyectos de distribución del ingreso y la inclusión social ya mostraron sus límites en el combate al estado de marginalidad y de exclusión en que viven grandes segmentos de la población latinoamericana. Únicamente la construcción de una nueva sociedad, basada en el empoderamiento de los marginados y en el ejercicio de una ciudadanía plena, podrá llevar a los países de la región a tomar el camino de la democracia inclusiva.

## Abstract

The policies of income distribution and social inclusion have shown their limits on the battle against marginality and exclusion of large segments of the Latin-American population. Only building a new society, based upon the empowerment of the marginal population and the exercise of a complete citizenship, the Latin-American countries can reach an inclusive democracy.

Palabras clave: *marginalidad, heterogeneidad, espacio público y democracia*

## INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los países de América Latina existe una enorme desigualdad social, una profunda heterogeneidad social basada en la distribución del ingreso, de

<sup>1</sup> Ponencia presentada en el 3° Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Democracia y Desigualdades, 6 de septiembre de 2006, Campinas, BR, UNICAMP.



las capacidades y de las oportunidades que disponen los habitantes. La desigualdad se expresa ya entre las regiones del país o entre las familias y, por supuesto, entre los individuos.<sup>2</sup> En el caso de México esa desigualdad se ha incrementado desde la liberalización comercial iniciada a partir de los años ochentas, pero sobre todo después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a finales de 1994.

La razón de ello parece radicar en que la dinámica económica comenzó a depender de variables externas, notoriamente de la inversión extranjera que impulsa la creación de empresas multinacionales, en especial maquiladoras, y del comercio exterior, es decir de las exportaciones de las manufacturas producidas por la maquila al mercado norteamericano. El flujo de las inversiones es autónomo de la dinámica de la economía nacional, depende básicamente del mercado de Estados Unidos, hacia donde se dirige más del 90% de las exportaciones totales, y de los costos (competitividad) de la economía mexicana frente a otros países. La industria nacional orientada al mercado interno fue afectada por las importaciones provenientes de naciones con costos más bajos (a lo que se aúna el creciente contrabando de mercancías y la producción local de mercancías piratas) que benefician con precios más bajos a los consumidores, pero destruyen parte de la industria nacional y limitan el mercado laboral, lo cual, además de la renuncia del gobierno a definir una política industrial que alentara ciertas ramas o sectores, perdió sus cadenas productivas, se desestructuró y ocasionó una desindustrialización en las viejas zonas del centro del país.<sup>3</sup>

La ubicación preferencial de las maquiladoras en los estados de la frontera norte y la desindustrialización de los estados del centro provocaron una modificación de la geografía económica del país. La región norte prosperó rápidamente, mientras el centro y sur del país se atrasaban cada vez más, agudizando la heterogeneidad y la desigualdad entre los estados del país. Cabe resaltar que la convergencia entre las distintas regiones era un hecho hasta los primeros años de la década de 1980, hasta la crisis del modelo basado en el desarrollo del mercado interno por la industrialización vía la sustitución de las importaciones (1976-1982) y la adopción del modelo neoliberal.<sup>4</sup> A partir de la liberalización del comercio y el fomento de una economía maquiladora la convergencia entre las regiones se transformó en divergencia.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Un estudio reciente sobre el tema está en Perry *et al.*, 2006.

<sup>3</sup> En los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (1982-1994) se afirmaba que la mejor política industrial era que no existiera, el mercado daría las señales correctas.

<sup>4</sup> Acerca de la política neoliberal, específicamente su aspecto fiscal, y sus efectos véase Vázquez, 2006.

<sup>5</sup> Respecto del desarrollo regional puede consultarse: *Comercio Exterior*, 2006a.

El desarrollo de las empresas maquiladoras tuvo como anclas la cercanía con Estados Unidos, el bajo costo de la mano de obra que emplea, la creación de sindicatos de protección que nulificaban los derechos de los trabajadores, además de incentivos aduanales y arancelarios. Uno de los resultados fue la caída de los salarios en el sector, un incremento sustancial del empleo femenino y el incremento de flujos migratorios de los estados del centro sur hacia la frontera norte, el incremento del empleo en la zona maquiladora correspondió a la caída del mismo en las antiguas zonas industriales. La falta de oferta suficiente de empleo tanto en la zona de la maquila, por el exceso de la migración, como en la zona centro sur se compensó con la emigración hacia Estados Unidos y el crecimiento del empleo informal en condiciones de precariedad creciente.<sup>6</sup>

La caída generalizada de las remuneraciones del trabajo (ocasionada por una política estatal orientada a tal fin)<sup>7</sup> agudizó la desigualdad entre el capital y el trabajo, así como la distancia entre el 30% más rico de la población, que pasó de acaparar el 60% del ingreso nacional en 1992 al 65% en 2002, con respecto al 30% más pobre que pasó de tener 12% a 9% en el mismo periodo.<sup>8</sup> La distancia entre las clases se alargó, lo cual ahora muestra consecuencias sociales y culturales que se acercan a situaciones de segregación o de segmentación social, es decir los mundos de unos y otros cada vez se tocan menos.

La falta de calidad de la mayoría de los nuevos puestos de trabajo y la precarización de los antiguos arrinconó al 60% de ésta en condiciones de pobreza y al 40% en el submundo de la pobreza extrema. Por las cifras del desempleo (siempre por abajo del 5%) muy pocos carecen de trabajo, pero la mayoría trabaja sin que ello le permita el mínimo para sobrevivir; pareciera que trabajar en condiciones precarias o no hacerlo, al final, redundan en condiciones de vida muy parecidas; el trabajo individual ya no garantiza el poder salir de la pobreza, pues para hacerlo se deben desarrollar estrategias familiares donde varios miembros aporten un poco al ingreso familiar. La pobreza y el empleo precario se vuelven situaciones de más larga duración para las personas y para las familias.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Sobre la evolución de la informalidad y de los factores asociados a ella véase Rodríguez-Oreggia *et al.*, 2006.

<sup>7</sup> En la explicación de los tecnócratas de la crisis de 1982 se destacaba que en el modelo anterior, denominado por ellos como populista, se habían incrementado irresponsablemente las remuneraciones de los trabajadores, lo cual había distorsionado el mercado laboral, incrementado los costos de producción y disparado la inflación; la política correctiva no podría ser otra que la represión salarial y el debilitamiento del papel de los sindicatos en la negociación colectiva.

<sup>8</sup> Sobre la evolución histórica de los salarios ver Bortz y Aguilera, 2006. Los datos sobre la distribución del ingreso fueron tomados de Moreno, 2006.

<sup>9</sup> Acerca de la evolución de los salarios y el trabajo véase la obra colectiva coordinada por Enrique de la Garza y Carlos Salas, 2003. Sobre las tendencias, Ernesto Peralta, 2006.

En conclusión, el nuevo modelo económico basado en la industria maquiladora, en la inversión extranjera y en el comercio internacional, así como el desarrollo de un capital financiero especulativo en manos de compañías internacionales que poco han apoyado el desarrollo de empresas nacionales, la expansión de servicios comerciales controlados por empresas transnacionales, reproduce y profundiza la desigualdad social volviéndola más extrema tanto en el plano regional como en el de las familias y de las personas. La pobreza se tornó más permanente, creando una sociedad segmentada, con limitada movilidad social vertical y amplia movilidad horizontal orientada al norte del país, a los centros turísticos en expansión (como Quintana Roo y su Riviera Maya), y en especial a Estados Unidos.<sup>10</sup>

Junto a los cambios experimentados en la dinámica económica se dio una modificación del papel del Estado en la economía, que vía las privatizaciones se deshace de las empresas estatales, con la excepción del petróleo y la electricidad, basa sus ingresos en las exportaciones de petróleo crudo<sup>11</sup> y en una reducida renta fiscal, y se convierte en un Estado débil, con una administración macroeconómica rigurosa, baja inflación y déficit fiscal reducido, con tasas de interés que han bajado pero superiores a las existentes en Estados Unidos y con una política de "cortos" al dinero circulante como medida de contención de la inflación que conlleva limitar el crecimiento económico. Esta política económica tiende a privilegiar la estabilidad macroeconómica buscando la clasificación internacional en grado de inversión, es decir, tiende a crear las mejores condiciones posibles al capital extranjero productivo, cuya inversión es indispensable para mantener la industria maquiladora, base de la exportación de manufacturas, pero también al especulativo sobre el cual no existe ningún control. En contraparte, se limita el incremento del crecimiento económico interno, la creación de empleos en el sector formal y el incremento de los salarios de los trabajadores, etcétera. En síntesis el nuevo papel del Estado en la economía contribuye a reproducir la desigualdad social y el incremento de la pobreza; lejos de compensar las distorsiones de mercado las potencia.

Para compensar los estragos que el modelo neoliberal ha producido y produce en la sociedad, el Estado confía en la política social, y en especial en la orientada a combatir la pobreza. Descontando que en México nunca

<sup>10</sup> Los efectos de la apertura comercial con el tema de la pobreza tienen una enorme bibliografía, baste señalar el texto de Pierre Salama, "Apertura y pobreza ¿Qué clase de apertura?", *Revista de Comercio Exterior*, vol. 56, núm. 1, enero de 2006, México, pp. 20-32.

<sup>11</sup> La empresa petrolera Pemex ha sido verdaderamente exprimida: las reservas han sido sobreexplotadas, los recursos obtenidos han servido para financiar el gasto público, no se ha reinvertido en la exploración de nuevos yacimientos ni en la manutención de las instalaciones, lo que multiplica los accidentes y derrames con fuertes costos ecológicos y humanos. Tampoco se ha invertido en nuevas refinerías, lo que obliga a la importación de gasolina para poder satisfacer la creciente demanda.

existió el estado de bienestar y que quizá con la excepción de la educación primaria (y aun ésta con limitaciones) nunca hubo una política universal, debemos señalar que existe una evolución de las políticas sociales contra la pobreza siempre dentro de una posición comunitaria y solidaria. Tal vez el primer esfuerzo integrado, definido como una política para superar la marginalidad y la pobreza, haya sido la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar),<sup>12</sup> de 1977, el cual procuraba que la población de menores recursos se beneficiara del desarrollo. Antes de la Coplamar hubo esfuerzos importantes orientados a distribuir recursos y beneficiar a grupos concretos de la sociedad mexicana tales como la reforma agraria, los precios de garantía a productos agrícolas o el establecimiento del salario mínimo, entre otras medidas que buscaban auxiliar a la población pobre del campo y la ciudad. No obstante, la falta de apoyos integrales y el modelo de desarrollo llevó a que la pobreza no disminuyera de manera significativa. La Coplamar, cuya política institucional integrada logró una disminución de la pobreza, estadísticamente probada, fue interrumpida por la crisis económica de 1982 y a partir de entonces se impuso la política focalizada, orientada a atender a grupos identificados como los más necesitados.

Desde los años treintas, la relación del Estado con los pobres se dio en el marco de un arreglo corporativo, resultado de amplias luchas populares en alianza con gobiernos posrevolucionarios, especialmente el de Lázaro Cárdenas, pero que acabó bajo el control político absoluto del Estado. En ese arreglo, los pobres, en general y por sectores funcionales, tenían una fuerte identidad: eran los herederos de la Revolución, los consentidos, ideológicamente hablando, del régimen. Con la crisis del sistema político, especialmente después de 1982, el arreglo se rompió, la alianza desapareció incluso del discurso oficial, los sectores organizados dentro del corporativismo se mantuvieron muy debilitados pero organizados y con amplia capacidad de chantajear al gobierno con sus amenazas de movilización. En cambio, los pobres perdieron sus vínculos ideológicos y políticos, salieron del discurso priísta, su herencia se consolidó en su miseria y su antigua representación política se diluyó: nadie los representaba y sólo el clientelismo local les permitía mantener alguna relación, marcada por la incertidumbre, con el gobierno.

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), creado durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), fue un intento de restablecer el vínculo populista entre el Estado y los sectores populares o pobres, sin la intermediación del PRI. Con dicho programa el gobierno buscaba organizar comunidades pobres y definir, con la participación de los pobladores, las

<sup>12</sup> Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, 1979.

necesidades y las obras a ser realizadas; sin embargo, la crisis económica de 1994 puso fin al experimento sin que hubiese definido una forma diferente de hacer política, y mucho menos haber mejorado la condición de los pobres.

La nueva política social implantada después del Pronasol, Progres a –actualmente redefinida en los programas Oportunidades, Contigo y Procampo– ha ido modificando su definición: Pronasol, a pesar de ser focalizada mediante la selección de las comunidades, buscaba organizarlas para la realización de las obras; tenía, desde luego, una clara intención política clientelar, pero también buscaba crear capital social, organización y redes locales. En las nuevas políticas, el individuo aislado es el objeto del programa, es su foco. El gobierno busca no hacer política, privilegia una definición técnica. La política social busca integrar a los pobres mediante su capacitación personal, no los identifica como los que no forman parte del orden político, no les otorga el estatus de actor político; su participación en el sistema está asegurada, según el modelo neoliberal, por la democracia electoral y su acceso a los programas de combate a la pobreza.

La complejidad de las políticas se ha incrementado al definir programas que agrupan desde acciones para resolver el problema del hambre, la subnutrición o las carencias básicas, con subsidios directos en dinero o reparto de alimentos, hasta acciones que incluyen objetivos combinados para desarrollar capacidades: alimentación, salud, educación, cuidados en el embarazo y de los niños en su primera etapa, es decir, buscan crear capital humano. Por otra parte, procuran que las personas puedan aprovechar sus capacidades ofreciendo oportunidades, con políticas orientadas al empleo o a la creación de micro empresas, empleos temporales, primer empleo, microcréditos y cajas de ahorro.<sup>13</sup> Sin embargo, en todos los casos se trata a los pobres como si fueran iguales, como si el hecho de estar por debajo de una medida estadística los igualara;<sup>14</sup> ciertamente se les diferencia por su grado de pobreza o de carencia, pero no se les otorga una definición social específica.<sup>15</sup> En consecuencia, se piensa que el proceso de dejar de ser pobre es más o menos el mismo para todos.

En la definición de las políticas públicas los pobres aparecen como un objeto, como un conjunto de personas o de familias a las que hay que

<sup>13</sup> Una presentación resumida de la nueva política contra la pobreza puede encontrarse en Székely, 2003.

<sup>14</sup> Acerca de los distintos tipos de políticas contra la pobreza puede consultarse Huber, 2003.

<sup>15</sup> El caso de las comunidades indígenas ha sido diferente en el gobierno de Vicente Fox, dada la lucha en el EZLN, los indígenas lograron una visibilidad amplia reconociéndose con ello el carácter multicultural de la república y reconociendo a su vez sus derechos culturales. Aunque el Acuerdo de San Andrés no fue respetado por el Congreso de la Unión, la legislación les dio una nueva personalidad jurídica. Por ello, aunque los programas que los atienden son los mismos que se aplican al resto de los pobres, en su caso hay un reconocimiento a su comunidad y a sus usos y costumbres.

asistir para que la pasen menos mal, ayudarlas a salir de su situación o, en el mejor de los casos, para que se integren a los mercados. Los pobres nunca son actores estratégicos, nunca participan en la definición y evaluación de esas políticas; son el objetivo pasivo y las instituciones miden el éxito de las políticas a través de la evolución de los índices: ¡Ya bajó el número de pobres! Pero nada nos dicen sobre sus procesos de producción y reproducción.

En las políticas actuales, focalizadas, la situación es más crítica, pues hay una individualización del receptor de ayuda, desvinculándolo de su entorno social, de su comunidad. Para decirlo con los términos de moda: se pretende crear capital individual, humano, pero se destruye el capital social; los pobres son reducidos a la calidad de individuos portadores de una tarjeta.<sup>16</sup> A muchos, y especialmente para muchas mujeres beneficiarias de los programas, se les imponen tareas comunitarias adicionales: cuidado de las escuelas, de las tiendas, etcétera, lo que no deja de ser una forma de expropiación, de cubrir gastos de su reproducción que deberían ser cubiertos por el Estado.

De hecho, se puede afirmar que con las nuevas políticas se puso fin a la época del Estado de bienestar y se impuso la concepción del Estado mínimo, cuya función principal es respetar y hacer respetar las leyes de libre mercado y privilegia el enfoque neoliberal: el objetivo es el individuo, no la comunidad.

Los grandes triunfos del gobierno se limitan a la caída de algunos puntos porcentuales en los índices de pobreza, al incremento del empleo formal, mayoritariamente precario, y al empleo informal. Para los últimos cuatro gobiernos mexicanos el modelo económico neoliberal, en su variante maquiladora, ha sido intocable. Salvo por la iniciativa de algunos empresarios en las ramas de la comunicación (telefonía y televisión), del cemento y de alimentos, la inserción a la economía es dependiente y subordinada al capital extranjero. En estas condiciones, los agentes económicos nacionales, públicos y privados, tienen pocas posibilidades de intervenir en la redefinición del modelo económico, por lo cual en el corto y mediano plazo es imposible esperar cambios orientados a disminuir la desigualdad social.

## **LOS EFECTOS SOBRE LA SOCIEDAD Y LA CIUDADANÍA**

En la misma época en que el modelo de sustitución de importaciones entraba en crisis (1977) se inició la apertura política, dando paso a la representación plural de la sociedad y posteriormente (1988) a la transición a la democracia, que culminaría con la alternancia en la presidencia de la

<sup>16</sup> De la Garza, 2005, ofrece un importante análisis al respecto.

república en el año 2000. La larga metamorfosis del régimen político, controlada siempre por el gobierno priísta, fue dando lugar a un régimen político democrático de corte liberal, donde el ciudadano es representado por medio de los partidos; el individuo con su libertad y autonomía es la base del sistema.<sup>17</sup>

Los derechos políticos electorales de los mexicanos se fortalecieron y, sin duda, se puede afirmar que en México hay un régimen electoral democrático, a pesar de que en las últimas elecciones para elegir presidente de la república, el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien perdió,<sup>18</sup> habló de fraude y buscó deslegitimar a las instituciones encargadas de administrar y juzgar las elecciones, aunque en el caso de las elecciones para senadores y diputados federales no hubo ninguna dificultad. En mi opinión, la impugnación de Andrés Manuel López Obrador fue más una estrategia orientada a modificar los resultados por la vía de la presión política (autoritaria) y a reforzar un liderazgo popular que le permita continuar en el escenario político, pese a su derrota en los comicios democráticos.

Lo que me parece muy importante es que la estrategia del PRD tiene sus bases en la desigualdad social y en la identificación discursiva con los pobres, "por el bien de todos primero los pobres", en oposición a los ricos, a la derecha que los representa, polarizando a los electores, creando una base social sin identidad específica y, por lo tanto, sin discurso propio, que se expresa por medio del líder.<sup>19</sup> Lo cerrado de los resultados entre el ganador y el segundo colocado fue suficiente para establecer que un recuento de votos bien hecho daría el triunfo al perdedor, y que las supuestas irregularidades fueron suficientes para derrotarlo a la mala, lo cual muestra lo endeble de las instituciones ante la falta de respeto por algún actor relevante.

En todo caso, el régimen democrático y sus instituciones perdieron legitimidad, pero no tanto como para poner en riesgo al sistema o a cualquiera de sus partes. La enseñanza, en mi opinión, tiene que ver con que una democracia liberal que sólo considera a los ciudadanos, en tanto actores individuales, es vulnerable porque no representa adecuadamente a una parte mayoritaria de la sociedad que vive en la pobreza y en situaciones

<sup>17</sup> Un estudio sobre los cambios en el sistema político, la ciudadanía y la cultura política puede verse en Durand, 2004.

<sup>18</sup> En el momento de escribir la ponencia el proceso no ha terminado, falta la decisión final del TRIFE, el dato está basado en los resultados informados por el IFE, después del cómputo distrital.

<sup>19</sup> Desde luego que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador tiene otras bases, como por ejemplo la tradicional separación entre la derecha conservadora, representada por el PAN, y los liberales que representa la Coalición por el Bien de Todos que postula a López Obrador, traduciendo lo liberal como la posición de izquierda. La separación clasista se refuerza con su carácter conservador y explotador de los pobres.

cada vez más precarias, sin canales de participación y defensa de sus intereses, y que por ello está siempre dispuesta a escuchar las propuestas de líderes que prometen solucionar sus carencias y poner fin a las injusticias. El resultado de la última elección no fue otro porque el PRI aún obtuvo una proporción muy importante del voto pobre –de hecho, fue el partido preferido de ellos– así como por la participación de otras fuerzas antisistema como el EZLN y su Otra Campaña, por ejemplo, que nulificaron la votación de un sector más radical que de otra manera habría votado por el PRD.

En todo caso, los resultados electorales muestran una clara diferenciación del voto por regiones: el norte y el bajío, o centro-norte, son mayoritariamente panistas, conservadores, mientras que el centro y el sur son perredistas; y sin duda también clasista pues los sectores más pudientes votan por el PAN, mientras los pobres y la clase media progresista lo hacen por el PRI o el PRD. La separación también tiene un componente étnico ya que en los estados con mayor porcentaje de población indígena se votó más por el PRD y el PRI. Es evidente que la sociedad mexicana no está conformada por ciudadanos independientes y autónomos, sino que éstos se dividen claramente en clases y regiones bien diferenciadas, cuya representación reclama un sistema mucho más complejo que la democracia liberal. Ya la socialdemocracia que instauró a mediados del siglo pasado la democracia plural en la mayoría de los países del norte de Europa, como Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, mostró la necesidad de hacer representar a los ciudadanos no sólo como individuos, sino también como partes de una sociedad heterogénea que debía estar claramente representada en el Estado.

Por lo anterior, es importante detenernos a presentar los cambios que ha habido en la representación y participación de los sectores populares y ver cómo se expresa políticamente la parte desfavorecida de la desigualdad o la heterogeneidad.

En el antiguo régimen autoritario de partido hegemónico había una representación más compleja. El PRI se conformaba con una estructura dual: por una parte, una organización territorial definida por los distritos electorales, que buscaba competir con otros partidos por la representación de los ciudadanos y, por la otra, una estructura de corte corporativo que tenía la representación de todos los campesinos, los obreros, los burócratas del sector público y otros sectores organizados (incluyendo a los trabajadores del sector informal), así como las comunidades indígenas. Escapaban al partido oficial amplias parcelas de los sectores medios y altos de la sociedad, quienes constituían la base ciudadana en disputa por los partidos.

Las crisis económicas de 1976, 1982 y 1994, pero sobre todo el cambio radical de la política económica –que incluyó el abandono de la retórica nacionalista y su cambio por el énfasis en el mercado como mecanismo de organización social– debilitaron a los sindicatos debido al despido de

trabajadores, el cierre de empresas, la disminución de los salarios y prestaciones, el fin de los subsidios al campo, la retirada de los precios de garantía, etcétera; asimismo, la nueva política económica, dirigida por tecnócratas, comprometidos con el credo neoliberal, puso fin a toda la estructura tripartita (Estado, empresarios y trabajadores) que participaba en la toma de decisiones en política económica. A partir de la segunda mitad de los años ochentas, la política económica fue "despolitizada" y definida "técnicamente". El debilitamiento de la vieja clase política priísta y del partido oficial frente a los tecnócratas y a los otros partidos acabó por debilitar a todo el sistema corporativo. La representación corporativa –el pluralismo autoritario–, fue marginada en el nuevo régimen democrático.

La representación política de las amplias capas de la sociedad que viven en la marginalidad, en la pobreza y en la precariedad laboral, fue rehaciendo sus canales. Las comunidades indígenas ganaron presencia por obra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual colocó en el espacio público el tema de la autonomía de los pueblos indios; asimismo, la definición del país como pluricultural logró que una amplia zona del estado de Chiapas fuese reconocida como territorio libre controlado por los zapatistas. Movimientos indígenas menos conocidos también avanzaron, pues otras comunidades lograron incluso que sus municipios eligiesen a sus autoridades de acuerdo con sus "usos y costumbres".<sup>20</sup> En otros estados como Guerrero la presencia de grupos guerrilleros también da a las comunidades indígenas una relevancia especial. En términos generales la representación política de los indígenas tiene un fuerte componente antisistema, como queda de manifiesto en "La Otra Campaña", organizada por el EZLN, la cual recorrió parte del país agrupando a las organizaciones afines en el campo y la ciudad, y llamando a boicotear el proceso electoral.

En el campo, algunas de las grandes organizaciones campesinas, como la CNC, dirigida por Eladio Ramírez, están actuando con mayor autonomía respecto al PRI, sin abandonarlo y, desde luego, frente al gobierno panista; otros movimientos como "El Barzón" o "El campo no aguanta más" han representado coyunturalmente los intereses y promovido las demandas de campesinos, trabajadores del campo y de pequeños productores; algunos líderes se han afiliado al PRD sin conformar una representación corporativa. En las luchas de los campesinos destacan las libradas en contra del TLCAN y por el establecimiento de políticas de apoyo al sector, considerando los intereses de los campesinos y trabajadores, incluyendo a los migrantes y a sus familias.

En el terreno sindical se ha mantenido la vieja división entre las

<sup>20</sup> El país está dividido en 2 446 municipios, de ellos 418 (17.2%) eligen a sus autoridades por "usos y costumbres". Todos pertenecen al estado de Oaxaca, pero hay en otros estados formas similares.

organizaciones sindicales, por una parte la organizada en el Congreso del Trabajo, afiliado al PRI, y por la otra los sindicatos independientes agrupados en la UNT que simpatizan con el PRD. En este terreno las luchas más relevantes se han dado por las iniciativas del gobierno para modificar el régimen de pensiones de algunos gremios, especialmente los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, o por modificar los términos contractuales de la industria azucarera, es decir, se trata de movimientos defensivos que luchan por conservar sus conquistas laborales y como productores. El enfrentamiento entre las corrientes también se ha expresado en la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. Mientras los oficiales, o los viejos corporativos priístas, están dispuestos a apoyar la reforma propuesta por el gobierno la cual busca desregular y flexibilizar las relaciones laborales –aunque se oponen a que se modifiquen las prebendas de las burocracias sindicales–, en cambio, los independientes pugnan porque la nueva ley laboral promueva la democracia sindical y se oponen a la desregulación y flexibilización de las relaciones de trabajo. El enfrentamiento entre estos intereses opuestos paralizó la reforma laboral dentro del Congreso.

Los trabajadores que se ocupan en el mercado informal –vendedores en la vía pública (entre ellos hay una gran heterogeneidad por lo que venden, que va desde alimentos hasta productos piratas y/o de contrabando), los transportes tolerados (taxis y bicitaxis)– han sido organizados por líderes muy autoritarios, quienes establecen relaciones clientelares con los gobiernos locales y con los partidos políticos, especialmente el PRI y el PRD, que explotan a los agremiados y los usan como masa de apoyo en mítines y otras actividades, especialmente en los enfrentamientos con las autoridades cuando éstas quieren poner orden o hacer cumplir la ley, o en acciones de presión para conservar o ampliar sus privilegios. La relación con las autoridades tiene siempre un componente de violencia.

La marginación de las corporaciones dentro del régimen político democrático empobreció la representatividad de la sociedad en la política y obligó a las corporaciones a “hacer” política por cauces tanto institucionales como no institucionales. Debido a que los espacios de decisión tripartita se nulificaron –algunos aún existen pero se volvieron inútiles, como el caso de la Comisión de Salarios Mínimos– las instituciones se volvieron débiles, sin recursos para resolver problemas o llevar negociaciones a buen término; la Secretaría del Trabajo o la de la Reforma Agraria son ejemplo de ello. La debilidad institucional y la incapacidad de dar respuestas y resolver los problemas en el marco de la ley, orilla a las organizaciones a utilizar vías no institucionales tales como bloqueos de avenidas o de carreteras, toma de edificios públicos, plantones en plazas públicas, secuestro de funcionarios, etcétera, que en general logran sus objetivos y debilitan la autoridad de las dependencias gubernamentales.

Ese tipo de prácticas políticas no convencionales también está siendo

utilizado de manera creciente por los habitantes de asentamientos urbanos irregulares para obtener servicios como agua, escuelas, etcétera.

En otras palabras, el Derecho, los cauces institucionales, que también son utilizados por las corporaciones y agrupaciones de trabajadores informales, se "complementa" cada vez más con prácticas no convencionales, incluida la violencia, para defender sus intereses, presentar sus demandas y resolverlas a su favor.

En resumen, la democracia liberal garantiza a los ciudadanos su igualdad política frente a la ley y al Estado, un ciudadano un voto, que efectivamente abre canales de participación a los ciudadanos, quienes la aprovecharon en 60% en la última elección y que, como resultado, los gobernantes son electos por los votantes; sin embargo, con todo ello no resuelve el problema de la representación de los sectores sociales específicos que componen la heterogeneidad social.

La separación del viejo pluralismo corporativo de la vida política institucional, y la creciente complejidad y tamaño de los sectores ubicados en la informalidad y el desempleo están generando un amplio espacio social que no está representado y, quizá, habría que afirmar que no es representable en el actual régimen democrático liberal.

La falta de representación política se aúna a la desconfianza que tienen en general los mexicanos, pero más aún los pobres, en las instituciones públicas, en los políticos y funcionarios, y refuerza su sentimiento de ineficacia ciudadana y su mala evaluación del desempeño de las instituciones del Estado. En tales condiciones, la legitimidad del Estado, de sus instituciones y de los gobernantes es cada vez más frágil, lo mismo que el apoyo político que les brindan los ciudadanos.

Antes de pasar al siguiente apartado es necesario realizar dos apuntes. El primero dice respecto de la heterogeneidad representada por lo diverso, por la etnia, el género, las preferencias sexuales (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales), que reclaman tener un reconocimiento en el espacio público y una representación en el Estado a fin de que sus derechos sean reconocidos, promovidos y aceptados por el resto de la sociedad. Su demanda reclama una pluralidad que va más allá del pluralismo democrático logrado por la socialdemocracia, que ha llevado a algunos autores a hablar de un nuevo tipo de ciudadanía (cuyos actores son esos colectivos formados en el mundo de lo diverso) y de una democracia posliberal. Esta nueva demanda lleva más allá la necesidad de transformación del régimen democrático liberal; pero, desde luego, su posible logro de ninguna manera resolvería los problemas de representación y participación de los sectores marginados, son procesos paralelos, pero diferentes. El segundo apunte se refiere a otro proceso que está debilitando severamente a las instituciones públicas: me refiero al crimen organizado, al tráfico ilegal de drogas, de armas, de personas, de mercancías, a la violencia brutal que emplean los cárteles

para controlar zonas y para nulificar la acción de la fuerza pública, negando el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Los hechos de violencia efectuados por las grandes organizaciones, que llegan a miles cada año, se traducen en el dominio de partes del territorio por parte del crimen, el cual se expande en el tejido social por medio de distintos procesos, el más dañino de los cuales quizá sea el narcomenudeo y el consecuente incremento de la población dependiente de alguna droga (marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas), pero también genera un cambio en la cultura de los jóvenes que pasan a preferir una buena vida corta, que una larga llena de pobreza y de humillación, además de la expansión de la cultura del buen bandido, de "santos" protectores de los narcos, el género del corrido dedicado a narrar la vida, gloria y miseria de los narcotraficantes, cuya popularidad crece en ambos lados de la frontera norte. El crimen organizado, en sus múltiples manifestaciones, destruye la vida pública, corrompe a las autoridades, impone la impunidad y debilita el Estado de derecho, somete a los órganos policiacos y crea espacios de la sociedad que sólo responden a su dinámica, sobre todo entre la población joven. En pocas palabras, genera anomia y debilidad institucional. El Estado destina cada vez más de su presupuesto para combatirlos y procurar vanamente mejorar la seguridad pública, pero se evidencia como crecientemente ineficaz y pierde apoyo en el resto de la población. De acuerdo con algunos especialistas sobre el tema, el Estado mexicano está a la defensiva y ha sido incapaz de limitar la violencia que en este año ya suma a más de mil muertos entre narcotraficantes de cárteles rivales, policías y funcionarios del sector de la seguridad pública.

Desde luego no nos vamos a ocupar de esos procesos, pero hay que tenerlos en cuenta para mostrar los límites de este trabajo y señalar los retos que enfrenta el Estado mexicano.

## **LA MARGINALIDAD Y LA POLÍTICA**

La agudización de la pobreza, la nueva configuración de la sociedad –que se desprende de la pérdida de centralidad del trabajo, del multiculturalismo y de la pluralidad política y de la limitación de las instituciones representativas– obliga a repensar la política como medio para reconstruir la sociedad.

La política a la que nos referimos no es, en consecuencia, lo que ahora conocemos como la política pública contra la pobreza; nos referimos a la política que permita la participación de quienes no son parte de, o han dejado de serlo. La política como diferendo, como conflicto con el orden institucional establecido, con lo político en términos de Claude Lefort (1988), nos aleja de la administración de lo político, de la gobernanza, de la

reproducción del sistema político y su relación con otros subsistemas, lo que Jacques Rancière (1996) define con el término de *policía*. Desde el punto de vista de los pobres, en su heterogénea especificidad, la nueva política implica la definición del diferendo con el orden actual; descontamos en ello la alternativa revolucionaria y, por ende, asumimos la presencia y dominación del capitalismo como modo de producción o como sistema económico regido por el libre mercado. El diferendo debe tomar en cuenta dos elementos que hemos destacado en las páginas anteriores: por una parte la crisis del sistema político, del régimen democrático, de la representación política, de la participación de los ciudadanos; por la otra, la crisis de la sociedad asalariada, el fin del trabajo asalariado como principio ordenador de la sociedad. En otras palabras, la nueva política no puede pensarse dentro de la lógica de la sociedad salarial, ni suponiendo que los antiguos mecanismos políticos de integración pudiesen funcionar. No es posible suponer que el sistema económico va a crear los puestos de trabajo formales necesarios, bien remunerados y con todas las prestaciones de la ley, ni tampoco que los pobres van a moverse por medio de instituciones políticas como los partidos políticos o sociales como los sindicatos. La nueva política conlleva tanto la modificación del orden social y político, como la creación de nuevos mecanismos de participación y representación políticas.

La formulación e instrumentación de nuevas políticas no son ninguna novedad en nuestro tiempo; se ha desarrollado una gran cantidad de intentos e incluso se ha llegado a la formulación de nuevas propuestas teóricas en torno a la democracia, la gobernanza y la participación social. No nos podemos detener en su análisis, sólo las vamos a enumerar con la finalidad de precisar el campo de nuestra reflexión.

Las más amplias, de mayor alcance analítico, son las que podemos denominar como la democratización de la democracia y la democracia postliberal. La primera está basada en la participación de las bases, es un proceso que va de abajo hacia arriba y quizá su mayor logro sea el presupuesto participativo desarrollado por el PT en Porto Alegre, Brasil, y que se ha puesto en práctica en muchas otras ciudades del mundo. Su principio fundamental es el derecho de las personas a participar en el gobierno de su comunidad y de su país. En el segundo caso se privilegia el déficit de representación política de las instituciones tradicionales, como los partidos políticos o los sindicatos. Una creciente diferenciación de la sociedad ha llevado a que la pluralidad no esté debidamente representada y en consecuencia se reconoce en el asociativismo (tercer sector) el recurso para subsanar dicho déficit. A pesar de las críticas sobre su débil representación y sus prácticas internas no siempre democráticas, se establece que su eficiencia y eficacia en la representación de intereses y su capacidad para mejorar la gobernanza y la inclusión social lo hacen una

opción para superar las limitaciones de la democracia. Un tercer caso, que tiene raíces muy antiguas y sólidas, es la administración colectiva de bienes comunes,<sup>21</sup> que representa una opción productiva y que da las pautas para lo que se ha llamado economía solidaria.<sup>22</sup>

Sin lugar a dudas, las opciones son muy valiosas y representan esfuerzos importantes para superar la crisis que viven las sociedades contemporáneas; sin embargo, para nuestros propósitos tienen ciertas limitaciones. En el caso de la propuesta de la democracia postliberal, el asociativismo aparece como una estructura de intermediación entre la sociedad y el Estado. Ciertamente puede, dependiendo del desarrollo del tercer sector, cubrir una amplia cantidad de intereses en distintos niveles –como el local, el estatal o regional, el nacional y el global– además de los diferentes espacios funcionales. No obstante, por su carácter de intermediario deja a los grupos marginados o excluidos como actores pasivos y en su intermediación siempre deberá tratar con instituciones estatales –o correspondientes a organismos internacionales– para concretar su participación en la elaboración de política, en la toma de decisiones y en su instrumentación. En este nivel, su carácter de representante entra en tensión con su representatividad de los intereses de abajo, poniendo en jaque su legitimidad.<sup>23</sup>

En el caso de la democratización de la democracia, la participación de las “bases” está garantizada, pero la práctica de la democracia directa o deliberativa se agota en los primeros niveles de gobierno o de espacio geopolítico; al ascender a niveles más complejos la representación se empieza a imponer necesariamente, dejando el funcionamiento colectivo en los niveles locales. Como sabemos, una de las limitaciones de lo local es su dificultad para ver la problemática nacional o mundial; por ello, la posibilidad de conflicto con otros ámbitos de gobierno es inevitable.

También entre los marginales o excluidos encontramos nuevas políticas que retan al orden establecido. Nos referimos a la acción de las comunidades indígenas, como en el caso del EZLN y de la elección de gobiernos municipales por medio de los usos y costumbres en más de 400 municipios del estado de Oaxaca. En ambos casos el papel de la comunidad, la democracia directa ejercida en las asambleas, es una forma muy avanzada de tomar decisiones; sin embargo, tiene en la actualidad el defecto de que no todos los miembros de la comunidad participan de la asamblea, como en el caso de las mujeres, pero también en el de Oaxaca, donde los habitantes de las agencias municipales o los avecindados no son incluidos. Pensamos, por la información

<sup>21</sup> El éxito en la administración colectiva de bienes comunitarios no es ninguna novedad, hay una larga historia de casos. Véase Ostrom, 2000.

<sup>22</sup> Sobre la economía solidaria puede consultarse el trabajo de Singer y De Souza, 2000.

<sup>23</sup> Véase Gurza *et al*, 2006.

de que disponemos sobre su evolución reciente, que la inclusión de quienes no participan es cuestión de tiempo, y en ese sentido muchos actores están haciendo nueva política para integrarse. En el caso de Oaxaca, esta forma de participación se agota en el nivel municipal, toda vez que las elecciones a nivel estatal y nacional para elegir autoridades son realizadas conforme la legislación electoral, vía partidos, votaciones ciudadanas, etcétera. En cambio, en el EZLN la organización política ha logrado abarcar niveles regionales, incluyendo varios municipios en lo que ellos llaman Los Caracoles; su limitación obvia es que está delimitada por una zona de guerra, excluida del resto.

De una manera muy atomizada también encontramos en la acción de grupos de marginales y excluidos formas diferentes de confrontación con las autoridades.<sup>24</sup> Nos referimos, por una parte, a la acción de enfrentamiento de sectores informales o ilegales que defienden sus "privilegios", utilizando incluso la fuerza contra la policía u otros funcionarios de los gobiernos municipales, estatales y federales. Es el caso de los habitantes de los asentamientos irregulares o de los vendedores en la calle, que se defienden utilizando una gran variedad de prácticas, entre las cuales nos interesa destacar las que afectan la vida pública, como el cierre de calles o carreteras, para que les sean reconocidos sus derechos de estar ahí o de vender ahí, así como que les provean de servicios básicos. Esos mismos grupos suelen enfrentar a la violencia policiaca (legal) con la misma moneda, logrando mantener sus posiciones en la mayoría de las veces. Al lado de estas prácticas "ilegales", dichos actores utilizan el Derecho y los tribunales para defenderse, acusando a las autoridades de abuso de autoridad, robo, despojo, etcétera, lo que les da herramientas adicionales en su lucha. En todo esto el dato relevante es que el Estado no es capaz de imponer la ley, de mantener el orden y se ve obligado a aceptar la presencia de estos grupos y el surgimiento de un nuevo "desorden" donde su autoridad se va erosionando<sup>25</sup> y su capacidad de gobierno es cada vez más limitada.

Tanto el caso de las comunidades indígenas como el de los sectores informales, que como sabemos son los que más crecen dentro de la economía,

<sup>24</sup> No llamamos estas confrontaciones de políticas porque preferimos reservar el término a su sentido moderno de la acción que busca participar en la definición del proyecto nacional o comunitario, lo que se quiera.

<sup>25</sup> Otras luchas sociales como las realizadas por los estudiantes del CEU y del CGH en contra de reformas en la UNAM, por los campesinos de Atenco en contra de la construcción de un aeropuerto o el movimiento de los agricultores denominado El Barzón, entre otros, han sido movimientos de resistencia para defender intereses y privilegios, sin que llegaran a formular nada nuevo en términos políticos. Sus demandas han sido para mantener su papel en la vieja forma de hacer política. En el sindicalismo corporativo también se han dado varias luchas de defensa de privilegios, como es el caso del Sindicato de los Cañeros y el de los Trabajadores del Seguro Social.

conlleven la necesidad de un nuevo orden sociopolítico. No basta con la presencia de intermediarios más eficaces, ni tampoco con aumentar la participación local; es indispensable un nuevo arreglo político que permita ordenar la heterogeneidad social, en especial hacer frente a la nueva dinámica del mercado de trabajo, de la capacidad del Estado y de las modificaciones que están experimentando otras instituciones, como la familia.

Así pues, no se está planteando nada nuevo cuando hablamos de la necesidad de una nueva política para resolver la oposición entre pobreza y ciudadanía. La solución debe encontrarse en los polos de la oposición, en la disminución de la pobreza, de la desigualdad social y, muy específicamente, en la posibilidad de neutralizar los mecanismos de reproducción de la situación particular de los distintos grupos de pobres, como lo hemos señalado. Al mismo tiempo, la ciudadanía en esos sectores se debe fortalecer, en especial los derechos civiles que dan certidumbre acerca de la justicia y la libertad, que son la base para constituir y mantener una sociedad civil dispuesta a luchar por la vigencia del nuevo arreglo, de exigir cuentas a las instituciones estatales y públicas no estatales, de exigir que exista transparencia y de estar dispuestos a protestar, a intervenir, para frenar todo y cualquier abuso.<sup>26</sup>

En este propósito se aúnan esfuerzos de diferente índole: a las políticas públicas orientadas a disminuir la pobreza, como el programa Oportunidades (que fortalece el capital humano de todas las personas, sin que por ello se destruya o se obstaculice el enriquecimiento del capital social), debe sumarse la presión de las asociaciones para que los distintos derechos que existen formalmente se hagan reales, se aplique y beneficien a los marginados y excluidos, se amplíe el derecho a participar en la definición y aplicación de las políticas orientadas a la inclusión de esos sectores, las cuales afectan sus vidas y su cotidianidad; también se debe adicionar la promoción de la participación de los pobladores en la definición de las prioridades que deben ser atendidas, que participen en la formulación del presupuesto, que vigilen su aplicación. Adicionalmente debe fomentarse la administración colectiva de bienes comunales y otras formas que fortalezcan la economía popular, ya que es de fundamental importancia encontrar los espacios institucionales para el desarrollo de lo que hoy llamamos economía informal, la cual debe ser reconceptualizada y refuncionalizada para fortalecerla como sector y aprovechar

<sup>26</sup> En el gobierno del presidente Vicente Fox se avanzó mucho en transparentar la administración pública, sin embargo la información parece no ser utilizada por la sociedad y mucho menos ha logrado que ésta se movilice para poner límite a los abusos transparentados. Existe el Derecho, pero la sociedad no parece interesarse, no parece dispuesta a ejercer su papel de vigilante para exigir cuentas y defender el nuevo Derecho.

su contribución a la sociedad en general. En síntesis, debe empoderarse a los grupos marginales y excluidos para que puedan convertirse en actores estratégicos de su futuro y de la definición del nuevo orden social.

La posibilidad de lograr esa nueva forma de hacer política, desde el disenso, depende básicamente de la organización autónoma y de la lucha de los marginales, de los pobres, de su capacidad de hacer que el resto de la sociedad los reconozca plenamente, y pasen a formar parte de un nuevo modelo de organización social, donde el mercado capitalista y el desarrollo del capitalismo, con su complejo científico tecnológico y su alta productividad, deje libre el espacio de la solidaridad social, de la comunicación racional, sin que someta a la mayor parte de la sociedad, como en la actualidad, a la degradación y a la pobreza (Giannotti, 2003).

## BIBLIOGRAFÍA

- Arditi, Benjamín (2005), *¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones*, Barcelona, México, Anthropos/ Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
- Bortz, Jeffrey y Marcos Aguilera (2006), "Earning a Living: A history of real wage studies in twentieth-century Mexico", *Latin American Research Review*, vol. 41, núm. 2, pp. 112-138.
- Comercio Exterior (2006), "Desigualdad del ingreso en Centro América, República Dominicana y México", Apuntes de Coyuntura. *Revista de Comercio Exterior*, vol. 56, núm. 7, julio, pp. 626-631.
- Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (1979), *Mínimos de bienestar*, México, Presidencia de la República.
- Durand Ponte, Víctor Manuel (2004), *Ciudadanía y cultura política. México 1993-2001*, México, Siglo XXI Editores.
- Garza de la, Enrique y Carlos Salas (coordinadores) (2004), *La situación del trabajo 2003*, México, UAM, Plaza y Valdés, 2003. Sobre la tendencia, Ernesto Peralta, "El mercado Laboral en México: perspectiva 2000-2020", *Revista de Comercio Exterior*, vol. 56, núm. 6, junio, México, pp. 468-482.
- Garza, Mercedes de la (2005), "Oportunidades y capital social", en Irma Arraigada (ed), *Aprender de la experiencia. El capital social en la pobreza*, Santiago de Chile, CEPAL, pp. 61-97.
- Giannotti, José Arthur (2003), "O novo império", *Folha de São Paulo, Suplemento Mais!*, São Paulo, 16 de marzo.
- Gurza A., P. Houtzager e G. Castello (2006), "Reforma da Democracia, Pluralização da Representação Política e Sociedade Civil". *Lua Nova*, núm. 67, São Paulo, CEDEC.

- Huber, Evelyn (2003), "Opciones de política social para América Latina: modelos neoliberales y socialdemócratas", *Revista de Comercio Exterior*, vol. 53, núm. 6, junio, México, pp. 548 - 554.
- Kaztman, R. y Guillermo Wormald (coordinadores) (2002), *Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social: cuatro áreas metropolitanas de América Latina*, Montevideo, Editor Fernando Errandonea.
- Lefort, Claude (1988), "Democracia y advenimiento de un lugar vacío", en *La invención democrática*, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 197-193.
- Moreno, Héctor (2006), "Riqueza y niveles de vida de los hogares en México", *Revista de Comercio Exterior*, vol. 56, núm. 2, México, febrero, pp. 122-133.
- Ostrom, Elinor (2000), *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva*, México, CRIM-UNAM/ FCE.
- Peralta, Ernesto (2006), "El Mercado laboral en México, perspectiva 2000-2020", *Revista Comercio Exterior*, vol. 46, núm. 6, México, junio, pp. 458-467.
- Perry, Guillermo E; Arias Omar S; López, J. Humberto, Maloney, William F., Servén, Luis (2006), *Poverty reduction and growth, virtuous and vicious circles*, Washington, The World Bank.
- Ranciére, Jacques (1996), *El desacuerdo: política y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Rodríguez-Oreggia Eduardo, Martín Lima, Alberto Villalpando (2006), "La informalidad en México: decisiones y premios salariales en la curva de ingreso", *Revista de Comercio Exterior*, vol. 56, núm. 2, México, febrero, pp. 114-121.
- Salama, Pierre (2006), "Apertura y Pobreza ¿Qué clase de apertura?" *Revista de Comercio Exterior*, vol. 56, núm. 1, enero, México, pp. 20-32.
- Schmitter, P. (2005), "Un posible esbozo de una democracia post-liberal", en Arditi B., *¿Democracia post-liberal? El espacio político de las asociaciones*, Barcelona/ México, Anthropos/ FCPYS/ UNAM, pp. 249-267.
- Singer, Paulo y Andre Ricardo de Souza (2000), *A economia solidária no Brasil. A autogestão como resposta ao desemprego*, São Paulo, Editora Contexto.
- Székely, Miguel (2003), "Hacia una nueva generación de política social", *Este País*, julio, suplemento.
- Vázquez L., Raúl (2006), "Los antecedentes del estancamiento económico: la política fiscal en México de 1984 a 1994", *Revista de Comercio Exterior*, vol. 56, núm. 6, México, junio, pp. 524-531.